

La Criminalidad Urbana en Colombia: Una aproximación cuantitativa

Alvaro Camacho Guizado*

I. Introducción¹

Colombia es uno de los países más violentos del mundo². Las cifras de homicidios en los últimos años dan una muestra de la situación (Cuadro 1). Las cifras reflejan la dinámica que ha tomado la sociedad colombiana en términos de la inseguridad ciudadana, la delincuencia y, de manera más dramática, la violencia. Esta tendencia ha estado acompañada de un crecimiento económico apreciable, lo que hace evidente la relativa autonomía de los diferentes componentes de la estructura social, y el realismo de la afirmación, hecha años atrás, de que la economía iba bien pero la nación iba mal.

Ahora bien, aunque hoy día sea plenamente reconocido que no es posible hablar en el país de

una violencia, sino que nuestra sociedad experimenta múltiples formas de conflictos cruentos³, los mayores esfuerzos se han dedicado a estudiar aquellas variantes que tienen una

Cuadro 1
COLOMBIA: EVOLUCION DE LA
CRIMINALIDAD HOMICIDA

Año	Población total	Número Homicidios	Tasa (x 10.000)	Indice base 1985=100
1985	29.879,330	12,899	4,31	100,00
1986	30.459,098	15,672	5,14	119,26
1987	31.058,145	17,419	5,60	129,93
1988	31.677,178	21,100	6,66	154,52
1989	32.316,933	23,310	7,21	167,29
1990	33.191,377	24,267	7,31	169,61
1991	33.250,570	28,284	8,51	197,45

* Excluye homicidios en accidentes de tránsito.

Fuente: Policía Nacional y cálculos propios.

* Sociólogo, Investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

1 Este artículo desarrolla una parte del proyecto presentado al Primer Concurso de Coyuntura Social organizado por Fedesarrollo y auspiciado por la Occidental de Colombia. Se presentan algunos resultados correspondientes a la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, Etapa 72, de junio de 1991, contenidos en el módulo dedicado a Violencia y Criminalidad Real, que tuvo como base una encuesta similar realizada por el DANE en 1985, y que fue revisada y adicionada a partir de discusiones en torno al texto. La investigación contó además con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert de Colombia - Fescol. Agradezco la colaboración de Esperanza Camargo, Hilda Esperanza Ortiz y Edgar Sánchez.

2 Ver cifras comparativas en Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, *Colombia: ciudad y violencia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990, pp. 42-43.

3 Comisión de estudios de la violencia, *Colombia: violencia y democracia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987.

incidencia directa y mayor en el orden público, es decir, las violencias organizadas, ligadas con las prácticas políticas (luchas por el poder del Estado o aquéllas propias del narcoterrorismo). Menos energías y tiempo se han dirigido a explorar aquella violencia cotidiana, difusa, y que afecta las vidas cotidianas, en el hogar o las calles de nuestras ciudades, y que se constituye en traba inocultable para el despliegue de una vida social activa, libre y democrática. Aún menores esfuerzos aún se han dedicado a tratar de dilucidar las matrices de relaciones que permiten conectar ambas expresiones⁴.

De hecho, una de las tareas centrales a que se ven confrontados los estudiosos del tema de las violencias en el país consiste en hacer esfuerzos para configurar perspectivas teóricas e hipótesis que permitan una mejor comprensión de los fenómenos descritos como violentos. Examinar, por ejemplo, las eventuales relaciones entre la violencia propia de la década de los años cincuenta y algunas de sus posibles expresiones contemporáneas, o las posibles conexiones entre la confrontación entre el Estado y las guerrillas con la violencia urbana, son, en fin, responsabilidades intelectuales que se encuentran a la orden del día de los analistas de lo social en nuestro país.

En este trabajo se intentará presentar algu-

nas de las cifras más relevantes sobre el tema, a partir del examen de los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, Etapa 72, de junio de 1991⁵, contenidos en el módulo dedicado a Violencia y Criminalidad Real, y adicionados con los proporcionados por la Revista Criminalidad, publicada por el Centro de Investigaciones Criminológicas de la Policía Nacional.

II. Hacia una caracterización de la Criminalidad Urbana

A. El tamaño de las ciudades y la criminalidad

En una investigación anterior se encontró que las relaciones entre el tamaño de las ciudades y sus tasas de violencia eran débiles, lo que tiende a morigerar la idea corriente de que las ciudades más grandes son más violentas, puesto que se presume que en ellas los lazos de control social tradicionales y extralegales son más débiles⁶. Esos hallazgos permiten sostener que esta relación se produce a partir de hechos o situaciones concretas que inciden sobre la dinámica de cada ciudad.

En nuestro caso tales situaciones pueden ser fenómenos políticos, el desarrollo de organizaciones delincuenciales, las percepciones de una

-
- 4 Un intento se encuentra en Camacho y Guzmán, *op. cit.*; ver también el trabajo de Héctor de los Ríos y Jaime Ruiz, «Violencia urbana en el Medellín de los 80's», en Colcultura, *Imágenes y reflexiones de la cultura en Colombia. Regiones, ciudades, violencia*, Memoria del Foro Nacional para, con, por, sobre, de, CULTURA, Bogotá, Colcultura, 1990; Alonso Salazar J., *No nacimos pa' semilla*, Bogotá, Cinep, 1990.
 - 5 La encuesta se realizó en Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Manizales, Medellín, Cali, Pasto, Villavicencio, Pereira y Cúcuta y sus correspondientes áreas metropolitanas. Villavicencio fue excluida de este análisis por problemas en la obtención de los datos. La encuesta cubrió 17.203 hogares, y la expansión produjo información para 2'841.012. El procedimiento estadístico para la expansión está descrito en DANE, *20 años de la Encuesta de Hogares en Colombia, Bogotá, Ediciones DANE, 1991*.
 - 6 Ver una discusión al respecto en Hernando Gómez Buendía, editor, *Urban Crime: Global Trends and Policies*, Tokio: The United Nations University, 1989, esp. págs 4-5.

impunidad generalizada o el impacto que pueden suscitar conflictos sociales violentos en áreas de influencia de cada ciudad. Un examen de las cifras para el período 1974-1986 corroboró esta hipótesis⁷.

En 1990, según la Policía Nacional, este tipo de relación se repite, y no hay una estrecha correspondencia entre el tamaño y las tasas de violencia (Cuadros 2 y 3). Respecto de los delitos contra la vida y la integridad personal, en 1990 Bogotá ocupa el octavo lugar, Medellín el tercero, Cali el séptimo y Barranquilla el noveno,

mientras que Pereira, Pasto y Bucaramanga ocupan los lugares primero, segundo y quinto. En 1991 las ubicaciones se mantienen relativamente similares.

En términos de delitos contra el patrimonio económico, los primeros lugares son ocupados por Pereira, Pasto y Bucaramanga, mientras que los últimos corresponden a Manizales, Cali, Medellín y Barranquilla.

Las cifras relativas a Bogotá, Medellín y Cali presentan una notable dispersión respecto de

Cuadro 2
TASA DELICTIVA POR 10.000 HABITANTES EN NUEVE CIUDADES
Y AREAS METROPOLITANAS, 1990

Ciudad	Población	Delitos generales		Contra la Vida		Contra patrimonio	
		Tasa	Posición	Tasa	Posición	Tasa	Posición
Barranquilla	1233919	42,89	9	12,54	9	27,50	8
Bucaramanga	558658	106,04	3	39,31	5	62,38	3
Bogotá	4809243	97,24	5	28,60	8	57,09	4
Manizales	337802	75,34	7	31,41	6	32,06	6
Medellín	2185598	87,20	6	49,71	3	29,72	7
Cali	1611308	48,99	8	29,96	7	13,37	9
Pasto	296091	154,07	2	62,24	2	82,24	2
Pereira	453865	161,50	1	67,75	1	88,40	1
Cúcuta	429040	111,88	4	49,58	4	51,95	5

* Las áreas metropolitanas de Bucaramanga (Girón, Piedecuesta), Manizales (Villamaría), Medellín (Caldas, La Estrella, Sabaneta, Girardota, Copacabana, Barbosa), Cali (Yumbo), Cúcuta (Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los municipios anotados entre paréntesis.

Fuente: DIJIN

⁷ Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Barney, *Colombia. Ciudad y violencia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990.

Cuadro 3
TASA DELICTIVA POR 10.000 HABITANTES EN NUEVE CIUDADES
Y AREAS METROPOLITANAS, 1991

Ciudad	Población	Delitos generales		Contra la Vida		Contra patrimonio	
		Tasa	Posición	Tasa	Posición	Tasa	Posición
Barranquilla	1334183	42,98	9	13,85	9	25,36	7
Bucaramanga	699240	93,26	6	33,51	5	57,22	5
Bogotá	5154434	127,50	3	31,37	7	78,37	1
Manizales	380877	57,24	7	22,66	8	23,29	8
Medellín	2333115	100,33	5	53,71	3	36,35	6
Cali	782926	52,95	8	32,40	6	12,88	9
Pasto	322755	138,22	2	59,02	2	65,50	3
Pereira	490660	156,97	1	71,76	1	75,14	2
Cúcuta	448825	115,55	4	50,47	4	57,62	4

* Las áreas metropolitanas (Girón), Manizales (Villamaría), Medellín (La Estrella, Sabaneta, Girardota, Barbosa), Cúcuta (Villa del Rosario, Zulia, Los Patios), no incluyen los Municipios anotados.

Fuente: DIJIN

las dos modalidades de delitos, mientras que las correspondientes a Pereira, Pasto y Bucaramanga son más coherentes. De hecho, se observa una desproporción entre los dos tipos de delitos en Medellín y en Bogotá: mientras en la primera las ofensas contra la vida son muy frecuentes, las realizadas contra la propiedad lo son mucho menos. Es decir, en Medellín hay, ceteris paribus, más violencia homicida que

delincuencia⁸. En Bogotá, en cambio, los delitos contra la vida son relativamente menos que en otras ciudades, pero respecto de las ofensas contra la propiedad, la ciudad tiene la más alta tasa. En Bogotá, así, hay, ceteris paribus, más delincuencia que violencia homicida. Las ciudades intermedias tienden a mostrar tasas mayores, y no se puede hacer una generalización respecto de la naturaleza particular de su diná-

8 Un fenómeno similar sucede en Cali, según investigaciones de Alvaro Guzmán. Cfr. «Cali: más violencia, menos delincuencia», (Inédito) Cali, Cidse, Universidad del Valle, 1993. Para efectos de mayor precisión, operacionalmente entendamos por violencia todo acto de fuerza contra la integridad física o la libertad de las personas, bien sea que tenga por objeto a ellas mismas o a sus bienes. En este sentido, un acto contra la propiedad es violento si es brutal, exterior y doloroso y se traduce en que pone en peligro la vida, la salud, la integridad corporal o la libertad de las personas. Un delito, en cambio, es un hecho cualquiera que sea punible legalmente, independientemente de que tenga los rasgos señalados como distintivos de la violencia. Sobre algunos debates acerca del concepto de violencia, ver Unesco, *La violencia y sus causas*, París, Editorial de la Unesco, 1981; Ives Michaud, *Violencia y política*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1989; Jean-Claude Chesnais, *Histoire de la violence*, Paris, Editions Robert Lafont, 1987; Hugh Davis Graham y Ted Robert Gurr, compiladores, *Violence in America*, New York, The New American Library, 1969; Johan Galtung, *Sobre la paz*, Barcelona, Editorial Fontanar, 198; Walter Benjamin, «Para la crítica de la violencia», en *Ensayos Escogidos*, Buenos Aires, Editorial Sur, 1967; Norberto Bobbio, *El problema de la guerra y las vías de la paz*, Barcelona, Editorial Gedisa, 1992.

mica violenta. Como ejemplos, ni Pereira ni Pasto pueden caracterizarse como epicentros de agudos conflictos políticos. Bucaramanga, en cambio, sí es centro de una región convulsionada por la violencia política.

En las ciudades más de 100.000 habitantes las más altas tasas de delitos en general correspondieron a Pereira, Florencia, Armenia, Popayán, Villavicencio, Pasto, Bucaramanga, Ibagué, Montería y Cúcuta. Las ciudades con menos delincuencia en general fueron Magangué, Ciénaga, Dosquebradas, Floridablanca

Cuadro 4
FORMAS DE DELINCUENCIA
EN DIEZ CIUDADES CON
MAS DE 100.000 Habs.

Ciudad	Posición de la tasa de delitos (Ordenados según delitos en general)	
	Vida e Integridad	Patrimonio Económico
Pereira	1	1
Florencia	2	3
Armenia	9	1
Popayán	5	4
Villavicencio	*	2
Pasto	3	6
Bucaramanga	6	5
Ibagué	10	8
Monteria	8	*
Cúcuta	7	*

* No se encuentra en los diez primeros lugares.

Fuente: DIJIN

Tumaco, Soacha, Valledupar, Barrancabermeja, Cali y Barranquilla⁹.

Al examinar con más detenimiento las cifras de las ciudades con más altas tasas de delitos en general se encuentra que no están las mayores ciudades del país, ni aquéllas sobre las cuales la prensa nacional informa más regularmente acerca de su dinámica violenta. Es decir, no aparecen ciudades como Barrancabermeja, Cali, Bogotá o las del Valle del Aburrá, que la información de prensa señala como violentas e inseguras¹⁰ (Cuadro 4).

Sin embargo, las relaciones se hacen más complejas al comparar las ciudades de la muestra con aquéllas que conforman sus áreas metropolitanas. En efecto, según las cifras de la Policía Nacional, las diferencias entre las cabeceras y las ciudades vecinas son considerables, siendo muy superiores las primeras a las segundas. Así, Pereira y Dosquebradas; Barranquilla y Soledad; Bucaramanga y Floridablanca, muestran grandes diferencias de tasas, aunque las ciudades vecinas de Medellín no difieren mucho de su epicentro. En realidad, al obtener las tasas a partir de las áreas metropolitanas, el nivel de delincuencia y de violencia de las ciudades decrece.

B. Los escenarios de la violencia

Como toda relación social, la violencia tiene un conjunto de componentes materiales y simbólicos, entre ellos los recursos utilizados, los

⁹ Cfr. Policía Nacional, *Criminalidad*, 1991.

¹⁰ *Ibid.*

ámbitos en que se expresa y los intereses en conflicto que la desatan. Así mismo tiene soportes estructurales e históricos que determinan las condiciones de su producción. Es decir, la violencia es tanto relacional como estructural, lo que significa que un intento de explicarla sociológicamente implica la combinación creativa de teorías estructurales y de la acción para dar cuenta tanto de sus mecanismos específicos de activación como de sus determinaciones¹¹.

En este trabajo se trata la violencia a partir de una perspectiva empírica y cuantitativa, y se la ve en sus manifestaciones en muertes, lesiones personales y atentados violentos contra la propiedad. Es claro que así se excluyen otras expresiones violentas que caracterizan a la sociedad colombiana, pero no lo es menos que hoy día en Colombia es justamente la dimensión asociada con la supervivencia física e integridad de los colombianos la que determina el aspecto más sobresaliente de la situación.

La violencia se activa y materializa fundamentalmente tanto en situaciones como en actos y objetos de violencia, que constituyen formas extremas de relación en un conflicto social. Estos, a su vez, pueden responder a múltiples

intereses cuya dilucidación puede escapar al hecho mismo. Es decir, en este campo el registro del hecho no es base suficiente para su explicación. Para que ésta sea viable se requiere, pues, ubicarla en un sistema interpretativo que dote de sentido a los intereses en pugna que se han manifestado.

En este orden de ideas el concepto de escenario ha sido en otras investigaciones relacionadas con ésta un poderoso auxiliar en la comprensión de la violencia¹². Un escenario es la combinatoria de los componentes de los hechos violentos que permiten su interpretación e inserción en los campos más generales de conflicto social. Es decir, posibilitan pasar del hecho violento contingente, azaroso, al acto explicable y explicado en términos del orden social afectado.

Los escenarios son recursos teóricos intermedios entre la acción y la estructura social. En función de una teoría más particular sobre la violencia, éstos permiten examinar las formas concretas como ella organiza relaciones sociales que consolidan campos de conflicto en un orden social específico.

A pesar de las limitaciones obvias que impo-

11 Este es a grandes rasgos el camino emprendido en el trabajo de Alvaro Camacho Guizado y Alvaro Guzmán Barney, «Indagaciones acerca de la naturaleza de la violencia urbana en Colombia», Cali, Cidse, Universidad del Valle (policopiado), 1986.

12 Cfr. Alvaro Camacho y Alvaro Guzmán, *Ciudad y violencia: contribución al estudio de la violencia urbana en Colombia*, Bogotá, Ediciones Foro Nacional, 1990. En esta investigación se encontró que en Cali los escenarios de violencia más frecuentes del campo económico fueron los atracos y los ajustes de cuentas; en el campo político los enfrentamientos de aparatos militares y las limpiezas políticas; y en el campo social las riñas y alcohol, las limpiezas sociales, la violencia familiar y la sexualidad. Giorgio Chinnici, en su estudio sobre el homicidio en la provincia de Palermo, Italia, desarrolla una matriz clasificatoria bastante parecida a la empleada aquí. Chinnici clasifica los homicidios en mafiosos, de delincuencia común, por intereses económicos, por honor-pasión, familiares, de venganzas, ocasionales, de orden público y no clasificables. Cfr. Giorgio Chinnici, «L'Omicidio nella provincia di Palermo, aspetti vittimologici», en Giorgio Chinnici y Umberto Santino, *La violenza programmata*, Milan, Franco Angeli, 1991, esp. págs. 29 y siguientes.

ne una información cuantitativa, es posible obtener una clasificación general de los delitos y hechos violentos registrados por la encuesta¹³. El resultado de este intento se refleja en el Cuadro 5.

Es clara la preponderancia de los escenarios económicos y la escasa presencia de los políticos y sociales. El alto número de no clasificables se explica fundamentalmente por la precariedad de la información de la encuesta, que no permite dilucidar si algunos de ellos pueden ser considerados dentro de los escenarios anteriores. La imposibilidad de catalogar los homicidios, los secuestros y los desaparecimientos, en particular, reducen la capacidad interpretativa del concepto de escenario a partir de este tipo de información. Sin embargo, del contexto general de la encuesta se puede deducir que los homicidios y lesiones se distribuyen mayoritariamente en los campos económico y social, aunque en algunas ciudades éstos pueden tener un claro sentido político.

De las informaciones más generales de la prensa y de la observación sistemática se colige que en nuestras ciudades los escenarios más frecuentes son los asociados con micro-conflictos relacionados con intereses económicos que incluyen atracos, defensas de propiedad, pugnas por redistribución de objetos robados y

conflictos entre organizaciones delincuenciales. En los escenarios del orden social se localizan preferentemente las limpiezas sociales, los conflictos pasionales y por el honor, las riñas suscitadas por el alcohol. Estos escenarios son típicamente urbanos y caracterizan en general la mortalidad homicida urbana en el país.

De otro lado, los hechos violentos localizados en los escenarios políticos expresan en la encuesta lo que probablemente es una realidad en el país, es decir, que los conflictos en este campo tienen expresiones mayoritarias en las áreas rurales y algunas ciudades que son claramente epicentros de organizaciones que de alguna manera se relacionan con la lucha armada. Aunque no es posible discriminarlos a partir de la información aquí contenida, numerosos estudios han sustentado este tipo de afirmación¹⁴.

C. Los escenarios de lo público y lo privado

Las relaciones entre la violencia y la delincuencia y los ámbitos públicos y/o privados de ocurrencia también contribuyen a dibujar el panorama sociológico de una sociedad, además de que permiten examinar las calidades de las relaciones entre el Estado y sus autoridades y la ciudadanía, y entre los ciudadanos en sus relaciones privadas.

13 Véase un intento de clasificación de homicidios en escenarios en Medellín en el estudio de Héctor Iván García García y Carlos Horacio Vélez Cano, *Caracterización de la muerte violenta por homicidios en Medellín en la década de los ochenta*, Trabajo de Grado presentado para optar al título de maestro en Salud Pública, Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Medicina «Héctor Abad Gómez», Medellín, 1992.

14 Comisión de estudios sobre la violencia, *Colombia: violencia y democracia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987; Camacho y Guzmán, *Ciudad y violencia*, op. cit.; Rodrigo Losada Lora y Eduardo Vélez Bustillo, *Muertes violentas en Colombia*, Informe de investigación, Bogotá, Instituto SER de Investigación, abril de 1988.

Cuadro 5
ESCENARIOS DE VIOLENCIA

Económicos	%	Políticos	%	Sociales	%	No clasificables	%
Atraco	34,35	Terrorismo	0,36	Viol.famil.	0,64	Homicidio	6,13
Hurto		Abuso autor.	0,18	Acso.carnal	0,09	Secuestro	0,55
Simple	22,72			Contam. amb.	0,45	Les. pers.	4,45
Con viol.	5,68			Peligr.común	0,09	Desaparecim.	0,09
Viol. dom.	0,18			Injuria	0,05	Acc. trans.	1,14
Vehículos	0,05			Otros		Extorsión	0,05
Raponazo	14,55						
Estafa	2,04						
Otros	0,23						
Total	79,80		0,54		1,32		12,41

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, junio de 1991.

En un trabajo anterior el tema fue planteado así:

Público y privado... involucran tanto las dimensiones del orden social como las conductas esperadas de los asociados. En el primer caso se es persona, en el segundo ciudadano. Estas nociones involucran algo más que la posición frente a la propiedad, la legalidad estatal y su capacidad de reglamentación, así como así como los espacios físicos de lo individual o lo colectivo. La distinción remite, por tanto, a la vieja dicotomía griega del *domo* y el *ágora*, y de la cual derivan las ideas de democracia, cultura política y ciudadanía, pero incluye también una dimensión de las prácticas individuales, en cuanto en un espacio público se despliegan acciones privadas y,

por contraste, determinaciones de lo público tienen expresión en ámbitos reclusos... Así se podrían reconocer como de lo público aquellas modalidades de violencia que involucran a personalidades que por su gestión defienden o retan ciertos principios del orden social global y que son víctimas precisamente por esa calidad. Y una violencia de lo privado es aquélla en que sólo están en juego los intereses individuales de los actores.

Desde luego es una distinción heurística que no desconoce las complejidades tanto de operacionalización como de combinatoria de determinantes públicos y privados en el mismo acto. Para propósitos ilustrativos distingamos, por ejemplo, el acto de violencia que involucra a funcionarios estatales, cuadros o figuras políticas o

de resonancia social (como víctimas o victimarios), cuando quiera que lo son precisamente por ostentar esa posición, del acto que los involucra como simples sujetos. En otras palabras, podemos distinguir una violencia de lo público o de lo privado cuando sabemos 'a nombre de qué' se actúa o se padece¹⁵.

Esta clasificación es especialmente útil en la medida en que parece haberse consolidado entre los colombianos una imagen según la cual la violencia es un problema de la vida pública, de las actividades políticas o de la delincuencia, organizada o no, y que los reductos del hogar, de lo íntimo, son espacios de protección personal. Solamente de un corto tiempo para acá se ha llamado reiteradamente la atención acerca del hecho inveterado de que las relaciones sociales privadas son igualmente fuertes nichos de conflictos que se busca resolver por la vía extrema de la violencia.

La persistencia de estas relaciones violentas en el campo de lo privado remite a una situación en la que las bases de la democracia son fundamentalmente débiles, y que el autoritarismo que expresa la relación estrictamente política y estatal tiene su contraparte en el mismo fenómeno en la vida privada¹⁶. Finalmente tiene una fuerte relación con la calidad de la vida, si se acepta que en este concepto queda comprendida la naturaleza de las relaciones sociales y no se

reduce a los niveles de consumo y de reproducción de la vida material.

En este análisis, las violencias de lo público y de lo privado se expresan en una doble dimensión: de una parte, los ámbitos de ocurrencia, que incluyen el hogar, el barrio, las vías públicas, los vehículos o los sitios de trabajo. De otra, el status de empleado estatal o particular del victimario o víctima. Con la primera se trata de examinar tanto la calidad de la convivencia ciudadana como las probabilidades de tener seguridad en los varios ámbitos; con la segunda, de detectar el grado en el que agentes del Estado desbordan los límites de su función de protección al ciudadano, o, por el contrario, son víctimas de la acción violenta de quienes los retan tanto en el terreno propiamente político como en el delincencial¹⁷.

En la primera dimensión, cerca de 25% de los delitos o hechos violentos ocurrió en los hogares, y aproximadamente la mitad de ellos fueron cometidos en la vía pública. Si se supone que aquéllos cometidos en el hogar, a excepción de la violencia familiar, se dieron en la forma de actos contra éste, las víctimas serían todos los miembros del mismo, a diferencia de los cometidos en las vías públicas u otros recintos, en los que se presume que se trata de víctimas individuales. Llama la atención que aproximadamente 10% ocurrió en el propio barrio de residencia¹⁸. Si se agrega esta cifra a la de los hogares,

15 Alvaro Camacho, «Dimensiones de lo público y lo privado en la violencia urbana en Cali», en Nora Segura (comp.) *Colombia: democracia y sociedad*, Cali/Bogotá, Cidse/Fescol, 1988, p. 292.

16 Norbert Elias, *El proceso de la civilización*, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1987; Robert Muchembled, *L'Invention de l'homme moderne*, París, Fayard, 1988.

17 Estas dos modalidades se ilustran con los reiterados casos de abusos y violencia homicida cometidos por miembros de la Policía Nacional y otros cuerpos armados del Estado, y con las muertes de muchos de ellos a manos de delincuentes, especialmente en Medellín durante los años recientes.

18 En Medellín, entre 1980 y 1989, 59% de los homicidios ocurrieron en el mismo barrio de residencia de las víctimas. Cfr. García y Vélez, *op. cit.*, Anexo 16, págs 260 y ss.

Cuadro 6
LUGAR DONDE SE COMETIO EL DELITO O HECHO VIOLENTO

Ciudad	Vía Pública	Domicilio	Barrio	Vehículo	Trabajo	Otro
Barranquilla	34,0	38,2	8,5	10,4	4,2	2,9
Bucaramanga	53,0	21,1	9,0	4,0	5,1	3,3
Bogotá	51,5	17,4	10,4	12,9	2,0	2,4
Manizales	59,2	17,5	8,0	2,1	2,0	2,7
Medellín	52,2	22,0	9,5	5,5	6,1	2,0
Cali	53,5	23,3	9,2	5,9	3,6	1,9
Pasto	41,8	34,3	9,9	3,7	4,5	2,5
Pereira	52,2	29,5	5,6	6,7	4,5	1,5
Cúcuta	39,4	29,7	20,0	4,9	7,8	1,8
Promedio	50,5	22,0	9,8	8,6	3,7	2,2

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, junio de 1991.

más de un tercio de las ofensas fueron cometidas en ámbitos privados o cuasi-privados, cercanos a las vidas cotidianas, lo que expresa las altas probabilidades de ser víctima en espacios de uso diario y necesario, y atestigua sobre los niveles de inseguridad de que se sienten víctimas los habitantes de nuestras ciudades (Cuadro 6).

La segunda medida de los públicos y lo privado se refiere a la identidad de los victimarios. Cuando se les solicitó a los encuestados que informaran si algún miembro del hogar había sido afectado por abusos o negligencias por parte de miembros de cuerpos de seguridad del Estado u otros funcionarios, un poco menos del 10% de los entrevistados contestó afirmativamente, y entre los denunciados la Policía ocupó un lugar preferencial, seguida del Das, la Sijín, el Ejército y el poder judicial (Cuadro 7).

Ahora bien, lo anterior no implica necesariamente que funcionarios estatales hubieran delinquido o ejercido violencia sobre los encuestados; la negligencia no entra necesariamente en esas categorías. Tampoco significa que los actos denunciados hubieran tenido un carácter público: es posible que los autores hubieran obrado a título privado y no en razón de su investidura. Aún con estas prevenciones, sí resulta significativo el número de denuncias contra las autoridades, y especialmente contra organismos armados, los que eventualmente tienen mayores posibilidades de causar daños físicos en las personas.

III. La dinámica de la convivencia ciudadana

Aunque la delincuencia y la violencia no agotan el conjunto de factores generadores de inseguridad, sí ocupan un lugar central en la preocupa-

Cuadro 7
ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECEN LAS PERSONAS
QUE COMETEN ABUSOS O NEGLIGENCIA CONTRA ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR, 1991

Ciudades y Areas	Total	Ninguno (%)	Policía (%)	DAS-F2 (%)	Ejército (%)	Poder Judicial (%)
Barranquilla	247493	94,4	1,1	4,4	0,1	
Bucaramanga	137185	95,0	2,5	1,7	0,5	0,4
Bogotá	1214953	89,1	6,5	3,1	1,1	0,2
Manizales	77684	95,2	4,2	0,1	0,5	
Medellín	497822	94,5	3,8	1,2	0,5	
Cali	393934	93,0	4,5	1,9	0,6	0,1
Pasto	51450	92,5	4,6	2,0	0,7	0,2
Pereira	90182	94,4	4,3	1,2	0,1	
Cúcuta	115782	96,0	2,4	1,3	0,4	
T o t a l	2826485	92,0	4,7	2,4	0,7	0,1

Fuente: Encuesta de Hogares, Etapa 72 Junio 1991.

ciones de los ciudadanos. A fin de tener un cuadro lo más completo posible sobre varias fuentes de inseguridad, en la encuesta se buscó comparar éstas con otras que no emanan directamente de situaciones de conflicto social y que responden más a condiciones concretas de habitabilidad urbana.

Los principales problemas barriales asociados con la seguridad frente a la criminalidad y la delincuencia (ausencia de vigilancia, delincuencia, presencia de pandillas, expendio, consumo de drogas y los conflictos vecinales) representaron cerca de dos tercios de las respuestas, y superan ampliamente otros problemas de seguridad colectiva como la mala calidad del terreno, de la vivienda o los accidentes de tránsito, los cuales, en especial en alguna zonas más pobres de las ciudades colombianas, pueden ser fuentes de inseguridad tan graves como las producidas por la delincuencia o la violencia. Debe llamar la atención, en contraste, que un

25% de las respuestas se refirió a la inexistencia de problemas en el barrio, lo que matiza el tipo de respuestas anteriores (Cuadro 8).

En este contexto resaltan algunos casos particulares: aunque Medellín ocupa el primer lugar en migraciones internas, respecto de problemas barriales ocupa este lugar solamente en cuanto a denuncias de consumo de drogas; en los demás problemas no está en los primeros lugares. Bogotá tiene la mayor proporción de denuncias de inseguridad, pero tampoco ocupa lugares destacados en los demás problemas barriales, aunque, como se mostró atrás, tiene una fuerte proporción de encuestados que cambiaron de residencia. En las denuncias de la presencia de pandillas, Cali ocupa el primer lugar, seguida de Barranquilla, lo que es de extrañar, dadas las relativamente bajas tasas de delincuencia y violencia de esta ciudad. Y en el otro extremo, Pereira, que presenta las más altas tasas según la Policía Nacional, ocupa el primar

Cuadro 8
PROBLEMAS EXISTENTES EN EL BARRIO, 1991
PARTICIPACION PORCENTUAL *

Ciudad	Ausencia de Vigilancia	Delincuencia	Presencia de Pandillas	Expedición y Consumo de Drogas	Mala Calidad Terreno	Conflicto entre Vecinos	Mala calidad Vivienda	Accidentes de Tránsito	Maltrato en Hogares	Otros Problemas	Ninguno	No sabe
Barranquilla	30,3	25,1	25,7	9,7	13,5	4,6	3,7	1,6	0,3	36,2	23,6	1,0
Bucaramanga	38,2	45,3	23,7	18,8	10,7	13,2	11,7	6,6	1,7	15,2	21,7	3,9
Bogotá	37,1	37,6	23,0	13,4	7,1	8,5	4,1	3,8	1,0	3,5	24,5	4,8
Manizales	36,0	18,4	9,1	16,6	3,0	5,8	5,8	2,9	1,1	1,0	34,0	8,8
Medellín	29,6	35,6	25,4	31,2	4,3	3,1	2,8	2,1	0,8	1,9	30,5	6,7
Cali	22,7	34,2	33,6	27,9	7,7	4,0	4,9	3,9	0,2	3,1	25,0	6,6
Pasto	42,6	28,4	16,3	14,1	5,1	7,2	5,6	4,3	1,1	4,9	32,9	2,8
Pereira	21,0	17,0	4,5	19,2	6,4	4,2	3,9	2,1	1,2	6,5	40,6	9,2
Cúcuta	39,1	41,8	9,1	19,7	21,7	8,7	8,5	4,6	1,4	11,9	23,5	4,0

* Los problemas no son excluyentes, de allí que las participaciones porcentuales, sumadas para cada ciudad, puedan sumar más de 100.

Fuente: Encuesta de Hogares, Etapa 72 Junio 1991.

lugar respecto de la inexistencia de problemas. Es clara, pues, la inconsistencia de las percepciones y las situaciones objetivas que se pueden detectar en la encuesta.

A. Los problemas colectivos y las soluciones barriales

Las respuestas que la ciudadanía organizada busque frente a los problemas que enfrenta colectivamente dan una medida de la capacidad de abocar por sí misma las soluciones que la afectan directamente, de la fortaleza de los vínculos solidarios existentes en ella o de la confianza en la capacidad de las autoridades para resolverlas. De otro lado, frente a la posible ineficacia de cualquiera de estas opciones, queda el recurso de la actividad estrictamente privada, personal o familiar.

Los resultados de la encuesta muestran una amplia gama de alternativas, entre las que resalta en primer lugar la inacción, que puede provenir de actitudes apáticas o de sentimientos de impotencia, en una proporción cercana a la mitad de las respuestas. La organización vecinal, que podría expresar una cierta opción de autonomías y solidaridades comunitarias, ocupa un tercer lugar, lo que indica que al menos se puede esperar una incipiente conciencia de las capacidades colectivas para confrontar asociadamente los problemas vecinales. Algo menos de un tercio de los encuestados optó por acudir a las autoridades, aunque aquéllos dispuestos a colaborar con la Policía se reducen sustancialmente. Las opciones de acciones estrictamente privadas, como la contratación de vigilancia privada,

la evasión de sitios peligrosos, el cambio de residencia o el armamentismo representan menos del 10% de las respuestas. Llama la atención, dadas las consideraciones hechas atrás acerca de la proliferación de armas de fuego en el país y de la mortalidad producida por ellas, el bajo porcentaje de entrevistados que planteó como posibilidad el armarse. Menos del 1% de ellos manifestó tal intención, en lo que parece ser una última opción luego de agotar otros cursos de acción.

Relacionar los tamaños de las ciudades con las diferentes opciones resulta interesante, por cuanto una teoría sociológica tradicional indicaría que en las ciudades más pequeñas, en las que las relaciones sociales tienden a ser más personales y directas, las opciones colectivas predominarían sobre las puramente privadas. Aunque la afirmación tendría que matizarse al considerar que si bien las ciudades más grandes tienden a ser más fragmentadas e impersonales, la distribución ecológica y barrial de la población en ellas puede producir áreas urbanas relativamente homogéneas en las que se desarrollarían lazos de solidaridad ciudadana frente a problemas colectivos.

Sin embargo, la homogeneidad poblacional no es garantía de esa solidaridad¹⁹. De hecho, ciudades más densas y heterogéneas pueden dispersar y localizar los conflictos y problemas, a la vez que su desarrollo en ciudades pequeñas y relativamente homogéneas pueden suscitar un incremento de las percepciones de amenazas y por tanto generalizarlos al conjunto e inhibir el despliegue de solidaridades comunales.

19 Ver Gómez Buendía, ed. *Op. Cit.*

Es decir, no es posible hacer hipótesis muy razonables respecto de esta relación. De hecho, en la encuesta se encuentran respuestas que muestran la heterogeneidad de las situaciones. Al ordenar las ciudades según su tamaño, se encuentra que Pasto, la más pequeña, está en el primer lugar en la opción de organizar el vecindario, simultáneamente ocupa el primero en cuanto a acudir a la vigilancia privada, y el último en la inacción. En el otro extremo, Bogotá ocupa un tercer lugar en la organización barrial, y también está entre las últimas respecto de la inacción. Pereira, penúltima en tamaño, está en el segundo lugar respecto de la inacción (aunque hay que recordar que ocupó el primer lugar respecto de la inexistencia de problemas barriales), y está en la mitad del espectro en relación con la organización vecinal en lo relativo a la organización barrial.

La población de Medellín, segunda en tamaño, ocupa el primer lugar entre quienes optan por no hacer nada, y el último lugar en la predisposición de acudir a las autoridades y en buscar la organización barrial. Bogotá, está de primera en la colaboración con la Policía, en un lugar intermedio respecto de acudir a las autoridades. Sorprende este lugar, dadas las constantes referencias periódicas a la insolidaridad capitalina.

En síntesis, igual que respecto de otras variables de este estudio, las generalizaciones en torno de las ciudades colombianas tienen que pasar por filtros empíricos que las matizan y reducen su capacidad descriptiva y explicativa. Es preciso, en cambio, hacer acercamientos más

profundos a los diferentes conglomerados urbanos y buscar sus dinámicas particulares en sus historias concretas y situaciones presentes.

B. Los derechos humanos

En este tema, crucial en términos de la paz y la convivencia ciudadana, se refleja una preocupante situación. En efecto, sólo un poco más del 10% de la población cree que estos derechos se respetan en el país, contra un 84% que no lo cree. Bogotá ocupa el primer lugar respecto de las dos respuestas, en tanto que Pasto ocupa los últimos (Cuadro 9).

Cuando se examinan los derechos humanos mencionados por los encuestados²⁰, se encuentran algunas respuestas a la situación expresada por la población. En efecto, los diez derechos

Cuadro 9
VIGENCIA DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN NUEVE CIUDADES
Y AREAS METROPOLITANAS (%)
JUNIO 1991

Ciudad	Respetan	Irrespetan	No sabe
Barranquilla	13,8	82,7	3,5
Bucaramanga	14,8	82,4	2,8
Bogotá	14,0	82,2	3,8
Manizales	11,1	84,5	4,4
Medellín	7,1	90,4	2,6
Cali	11,8	85,3	2,9
Pasto	13,2	85,3	1,5
Pereira	14,0	83,8	2,2
Cúcuta	13,9	78,9	7,2
Promedio	12,2	84,5	3,3

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, junio de 1991.

²⁰ Se solicitó a los informantes mencionar tres derechos.

más mencionados representan el 96% del total, y entre los primeros cinco el derecho a la vida es casi tres veces superior al que le sigue en importancia, lo que refleja no sólo una preocupación explícita sobre el tema, sino un reconocimiento de la precariedad del mismo en la sociedad colombiana. Resalta además que el derecho al trabajo ocupe un segundo lugar de importancia, por encima de la integridad física. De hecho, parece una incoherencia que este último, tan estrechamente asociado con la vida, ocupe un noveno lugar con un porcentaje relativamente reducido, y que se encuentre por debajo de la seguridad social, la intimidad, la propiedad privada o la libre expresión y comunicación. En otras palabras, parecería que en las percepciones de los informantes luego del derecho a la vida se asigna fundamental importancia a condiciones que permitan una mejor reproducción de la vida individual en la colectividad. El que la gente valore el derecho al trabajo y a la educación expresan ese interés, que es a la vez un reconocimiento de su debilidad en el país.

IV. Algunos comentarios finales

La información presentada ha permitido tener un panorama parcial de lo que afecta a la población urbana respecto de su seguridad y tranquilidad. Los homicidios, los atracos, los hurtos, los raponazos, los robos de automotores y la violencia familiar son los hechos que más directamente generan sentimientos de inseguridad y temor. En general, exceptuando los homicidios, sobre los cuales no es posible hacer generalizaciones a partir de los datos, se trata de actos delectivos y/o violentos asociados con las vidas privadas de los habitantes urbanos, con la impunidad, el uso peculiar de la ciudad, con los

lugares frecuentados y con la escasez de vigilancia y protección.

Muy interesante resulta encontrar que no hay una asociación importante entre el tamaño de las ciudades y las tasas de criminalidad. Si esta ausencia de relación se sostuviera, apoyada por más investigación empírica, estaríamos contrariando expresiones sociológicas tradicionales que ven en el crecimiento urbano la fuente de despersonalización, pérdida de valores sociales y de ataduras a instituciones que contribuyen a frenar tendencias agresivas. Al contrario, se podrían elaborar hipótesis alternativas que buscaran las fuentes de inseguridad y violencia en otras variables más ligadas a procesos sociales específicos de cada ciudad, como sus historias recientes o las características de los conflictos en sus zonas de influencia.

En un examen más particular del tipo de hechos registrados es posible detectar lo que probablemente es uno de los núcleos centrales de los problemas de la inseguridad urbana y sus relaciones con la democracia. En efecto, a partir de la información se puede advertir que la violencia urbana colombiana es principalmente expresión de múltiples micro-conflictos sociales, más que una manifestación de las violencias más institucionalizadas y que revelan la existencia de grandes conflictos sociales. En otras palabras, la violencia e inseguridad urbanas tienden a expresar algunas situaciones de conflictos relacionados con venganzas, defensas del honor, acceso y defensa de la propiedad, consumos de alcohol, anomías, conflictos familiares, en fin, sistemas de relaciones sociales ligados con las vida cotidiana e intereses inmediatos, con las condiciones de su reproducción como habitantes urbanos.

Delitos o hechos violentos como los atracos y hurtos, que en general tienden a ser obra de delincuentes profesionales, se acompañan de la violencia familiar, las amenazas, los accidentes o las calumnias que no son típicamente productos de una delincuencia profesional, sino de situaciones particulares que no convierten a los autores necesariamente en delincuentes. De hecho, no podemos saber cuántos de los homicidios registrados a este tipo de situaciones. Riñas al calor del alcohol, ocasionales contradicciones o malentendidos que podrían zanjarse con efectos menos deletéreos, se convierten en homicidios gracias a las incontinencias emocionales, a la ausencia de recursos inmediatos de arbitraje y muy especialmente al porte de armas de fuego.

Sin embargo, la violencia urbana colombiana no se agota en esos micro-conflictos. También se expresan en nuestras ciudades la violencia política y la desatada por la defensa de determinados intereses que se mueven en la ilegalidad. Aunque la encuesta no permite una discriminación precisa, las informaciones oficiales y de prensa hacen pensar que algunas modalidades delictivas o violentas registradas en ella pueden estar asociadas con la violencia política. Tales pueden ser el terrorismo, algunos desaparecimientos y secuestros que, como se vio atrás, representan una proporción muy minoritaria del panorama delictivo y violento urbano.

Otro tanto sucede con la violencia que se asocia con organizaciones delictivas no políticas. Algunas ciudades son claramente epicentros de tales expresiones de violencia, y así la encuesta no refleja las situaciones particulares, otras

fuentes de información permiten inferir que una cierta porción de los casos denunciados en ella respondan a esa esfera de conflicto social. Cuando algunos encuestados se refieren al consumo de drogas y la presencia de pandillas en sus vecindarios como parte de sus problemas de seguridad local, están tocando probablemente aspectos de un conflicto social que puede incluir también casos de terrorismo, venganzas, sin duda muchos de los homicidios, amenazas o lesiones personales, que se registran sin que sea posible averiguar su ubicación en un campo específico de conflicto social.

Nuestra violencia urbana, en síntesis, parece concentrarse en problemas de inseguridad e intranquilidad que erosionan la calidad de la vida urbana de los colombianos, al mismo tiempo que revelan que ésta es, al menos para una buena porción de la población, bastante precaria. En efecto, la inseguridad y el temor frente a las perspectivas de ser agredidos impiden que los habitantes de las ciudades puedan disfrutar plenamente de las facilidades que típicamente ofrecen las ciudades, y ello se traduce tanto en un sistema pobre de relaciones sociales como en la dificultad de que se configure e institucionalice una ética ciudadana de lo público, atributo clave para el desarrollo de una democracia.

El clima de inseguridad y temor que tiende a generalizarse en buena medida es construido sobre la base de experiencias personales o de allegados. A partir de un número de tales experiencias, que por necesidades son relativamente reducidas, y que pueden o no coincidir con situaciones reales, se elabora una concepción de la vida urbana en la que lo público, lo oscuro, lo no vigilado, se convierten en sinónimos de peli-

gro y por tanto en espacios a los que hay que evitar. Esta reducción de lo público lleva paralela una exaltación de lo privado como lugar de seguridad. Sin embargo, los datos consignados arriba, que muestran que más de un tercio de los delitos o hechos violentos fueron cometidos en ámbitos privados o cuasiprivados, arrojan dudas sobre la pertinencia de las exaltaciones de la vida privada. No está por demás insistir en que la reivindicación de lo público es la mayor con-

quista de la democracia, y que su abandono abre el camino para expresiones y formas políticas autoritarias, sin control ciudadano.

De otra parte, difícil será conciliar una exigencia de vida pública, institucional, democrática, o de exigir un Estado y un régimen político democrático, con la existencia reiterada de prácticas violentas, agresivas y antidemocráticas en la vida privada.